



14 de octubre de 2015

Hon. Ramón L. Nieves Pérez
Presidente
Comisión de Asuntos Energéticos
y Recursos de Agua
Senado de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Presidente:

La Oficina de Gerencia y Presupuesto presenta sus comentarios relacionados al **Proyecto de la Cámara Núm. 2204**, texto aprobado por la Asamblea Legislativa, que propone crear la "Ley Para el Consumo Eficiente de Agua de Puerto Rico", establecer los mecanismos de implementación y otros fines relacionados.

Según la Exposición de Motivos, el agua es uno de los recursos naturales más importantes para el ser humano y por ello se debe repensar el marco de su política pública a los fines de atemperarla a nuestra cambiante realidad social y económica. Además, se explica que durante las últimas décadas el ser humano ha desarrollado cierto grado de conciencia colectiva en relación a los recursos naturales y al medio ambiente. Con motivo de ello, se han aprobado leyes e incluso protocolos internacionales para controlar el consumo energético y otras medidas relacionadas a la conservación del medio ambiente. Por ende, se explica que el propósito de la presente medida es establecer una nueva política pública a los fines de controlar la cantidad de agua que utilizan los diversos servicios sanitarios y demás accesorios de plomería. Esta medida busca establecer los criterios utilizados por el programa WaterSense de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) como los criterios de Puerto Rico para el manejo del agua.

Expuesto el propósito y contenido del **Proyecto de la Cámara Núm. 2204**, procedemos a ofrecer nuestros comentarios legales sobre el mismo. Veamos.

Mundialmente se ha reconocido que el agua potable limpia, así como los buenos sistemas de limpieza, son fundamentales para el desarrollo y sobrevivencia del ser humano. Sin embargo, a medida que la población mundial aumenta, así mismo crecen los problemas relacionados a los abastos de agua. *Id.*

Así pues, alrededor del mundo se han comenzado a implementar una serie de iniciativas dirigidas a fomentar el uso eficiente del recurso del agua. A modo de ejemplo, es importante resaltar la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conocida como Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015, que tiene el propósito de promover los esfuerzos para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en materia de agua y saneamiento para el 2015. Con esta iniciativa, la ONU trata de reforzar la cooperación a todos los niveles, de manera que se alcancen los





objetivos relacionados con el agua, acordados en la Declaración del Milenio, el Plan de Ejecución de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo y la Agenda 21. Según la ONU, el gran desafío de esta iniciativa consiste en dirigir la atención hacia políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de calidad como de cantidad, y que incluyan medidas de mejora del saneamiento. Como parte de esta iniciativa, se han galardonado varios Proyectos a nivel mundial, entre los que se encuentra “One Drop” en India y “Cultivando Agua Buena” en Brasil. Ambos Proyectos, dirigidos a crear conciencia en la ciudadanía en cuanto al uso eficiente del agua y la conservación del preciado recurso natural.

Por otro lado, nos parece pertinente mencionar además, que Cuba dirige gran parte de su presupuesto a obras de infraestructura hidrológica, contando con 241 represas, 798 micro represas, 778 km de canales y 2,524 estaciones de bombeo. Así pues, la isla vecina ha implementado un programa de Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas, que asegura la protección, disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hidrológicos. Id. Sin embargo, a pesar de que Cuba ha invertido gran cantidad de dinero en esto (aproximadamente \$2,000 millones), ha confrontado problemas en la distribución de agua a través de todo el país. Siendo ello así, como parte de la política pública de dicha nación, se han creado varias iniciativas para la conservación y protección del agua. Entre estas se encuentra el Programa de Ahorro y Uso Racional del Agua, que propone revisar constantemente la infraestructura para eliminar salideros y verificar el cumplimiento de las medidas de ahorro y uso racional del agua.

Asimismo, debemos mencionar que esta Administración ha tomado medidas de política pública dirigidas a la protección de los recursos naturales, así como para reducir el consumo desmedido de los mismos. En esta dirección, en la Ley 66-2014, según enmendada, conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, se requiere que las entidades de la Rama Ejecutiva cuyos gastos de funcionamiento se sufragan total o parcialmente con el Fondo General reduzcan su gasto de consumo de acueductos y alcantarillados en un cinco (5) por ciento anual para los años 2014-15, 2015-16 y 2016-17, de forma que se refleje una reducción total de quince (15) por ciento en los tres (3) años. El por ciento de la reducción se computará tomando como base el consumo de acueducto y alcantarillado realizado para el año 2012-13. La OGP fiscalizará el cumplimiento con lo mencionado, y podrá realizar una disminución en el presupuesto de gastos de funcionamiento para el año fiscal siguiente de las entidades que incumplan con la tasa porcentual de reducción de gasto establecida. La misma será equivalente al valor monetario del consumo en exceso a la tasa de reducción establecida.

Es importante notar que, desde hace décadas, en Puerto Rico se ha reconocido a través de legislación la importancia del agua como recurso natural vital para la vida y la salud humana. La Ley Núm. 136 del 3 de junio de 1976, conocida como la “Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico”, estableció como política pública el “asegurar el abasto de aguas que precisen las generaciones puertorriqueñas presentes y futuras mediante el establecimiento de áreas de reserva de aguas y aprovechar las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al interés público y a criterios de uso óptimo, beneficioso y razonables.” Reconociendo la realidad de Puerto Rico como una isla propensa a sequías, dicha Ley dispone que el Secretario del DRNA tendrá la responsabilidad de velar por el uso apropiado del recurso de agua, así como adoptar la reglamentación pertinente a esos efectos.



Asimismo, la Ley Núm. 292-1999, conocida como la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Kársica de Puerto Rico”, ofrece protección, entre otras, a áreas con valor hidrológico. Entre otras cosas, esta ley reconoció la importancia del Karso para el abastecimiento de nuestros acuíferos y la producción natural de agua fresca en la Isla.

Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos cuenta con el Programa WaterSense, que es auspiciado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), y el cual se encarga de proteger el futuro de los abastos de agua de la nación americana al promover el uso eficiente del agua y aumentar la demanda por productos, servicios y prácticas eficientes. Al diseñar y certificar productos y servicios que satisfacen las especificaciones de eficiencia de agua, WaterSense ayuda a los consumidores a identificar productos que utilizan agua eficientemente, trabajan bien, ahorran dinero y fomentan el desarrollo innovador de productos en las manufacturas.

Cónsono con lo anterior, la presente medida propone que múltiples agencias gubernamentales en Puerto Rico, adopten planes de cumplimiento con las exigencias del Programa WaterSense de la EPA. Por ejemplo, entre las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley ante nuestra consideración se encuentran:

1. Que la Administración de Servicios Generales (ASG), elaborará un reglamento para limitar la compra de accesorios de plomería por parte de las entidades gubernamentales, únicamente a aquellos que cumplan con las disposiciones de certificación del programa WaterSense. Dicho reglamento deberá implementarse en un periodo de noventa (90) días desde la aprobación de esta medida.
2. Que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), en conjunto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), desarrollarán una campaña de concienciación ciudadana para promover los beneficios de sustituir y utilizar accesorios de plomería certificados WaterSense. Dicha campaña deberá comenzar en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días después de aprobada esta medida.
3. Que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la ASG y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) establecerán un protocolo que garantice el cumplimiento de esta ley, en todo proyecto nuevo o remodelación y a los fines de reemplazar en un plazo de siete (7) años todo accesorio de plomería de las dependencias gubernamentales a su cargo, por equipos con certificación WaterSense.
4. Que el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico (AVP) diseñaran y someterán a la OGP un plan estratégico a los fines de hacer cumplir a los residenciales públicos de Puerto Rico las disposiciones de esta Ley de forma que no se menoscabe el presupuesto del Estado Libre Asociado.



5. Que el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) diseñara y someterá a la OGP un plan estratégico a los fines de hacer cumplir las escuelas de Puerto Rico y sus oficinas administrativas con las disposiciones de esta Ley de forma que no se menoscabe el presupuesto operacional del DE. Asimismo, el DE tendrá la obligación de diseñar una campaña educativa a los fines de concienciar al estudiantado respecto a la conservación y preservación del agua.
6. Que la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), establecerá un plan de reciclaje de los accesorios de plomería decomisados durante la implementación del Artículo 7 de esta Ley.

Nótese pues, que la medida bajo evaluación es una abarcadora que dispone que múltiples agencias cumplan con lo requerido por el Programa WaterSense de la EPA, cuyo cumplimiento es actualmente voluntario. Ello, con el propósito de lograr un uso eficiente del agua, de acuerdo a los parámetros establecidos por dicho Programa. Ante lo cual, resulta forzoso concluir que, aunque lo propuesto resulte loable y cónsono con los movimientos de avanzada a nivel internacional, la medida conllevaría un impacto presupuestario que aunque incierto, sería considerable para las agencias envueltas. Veamos.

El Departamento de Educación (DE), por ejemplo, nos informa que en la medida que su presupuesto lo permita, la Oficina para Mejoras de las Escuelas Públicas (OMEP), podrá reemplazar los inodoros, grifos, mezcladoras, entre otros, por aquellos instrumentos que cumplan con los criterios para el rendimiento y la eficiencia según los requisitos de WaterSense. Asimismo, el DE nos indicó que puede implementar un plan de trabajo que incluya, pero que no se limite a: identificación y eliminación de salideros; reparación y/o reemplazo de accesorios de baños, fregaderos, lavamanos, etc.; mantenimiento preventivo; promoción de reforestación. Sin embargo, en el caso particular de esta agencia, debemos traer a su atención que en Puerto Rico en el presente año escolar existen 1,332 planteles escolares que conforman el sistema de educación público del país, sin contar las oficinas administrativas con las que cuenta el DE. Consecuentemente, entendemos que ordenarle al DE a reemplazar los equipos de plomería en todas sus instalaciones, de manera que los mismos cumplan con los requerimientos del programa federal WaterSense, tendrá un impacto sustancial en el presupuesto de la agencia, el cual en estos momentos resulta indeterminado.

La Administración de Servicios Generales (ASG), de otro lado, nos informa que están de acuerdo con lo propuesto, por lo que en caso de que se apruebe esta medida, deberá incluirse en las especificaciones para las compras de equipo y como parte de los términos y condiciones de los procesos de subasta de obra, ya sea remodelación, ampliación o construcción, los requerimientos de cumplimiento de WaterSense.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), de otro lado, nos indica que actualmente, no cuenta con una campaña publicitaria sobre el consumo eficiente del agua, pero que el costo de dicha campaña estará sujeto a diversos factores, como: creación del concepto, pauta en los medios, y la extensión de la campaña; lo que deberá tomarse en consideración al evaluar lo propuesto en esta medida. A modo de cuantificar el impacto de ello, vemos por ejemplo que del 3 al 31 de julio de 2014,



una campaña realizada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Policía de Puerto Rico y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles donde exhorta a los conductores a no ingerir bebidas alcohólicas, tuvo un costo de \$400,000. La misma tuvo anuncios pautados en televisión, radio, prensa escrita, Internet, y redes sociales.

Por otro lado, según información provista por la Administración de Vivienda Pública (AVP), la implementación de lo propuesto en esta medida resultaría muy oneroso para dicha agencia, ya que instalar equipos certificados por WaterSense, tiene un costo mayor al de los equipos que se instalan actualmente como parte de los proyectos de modernización. De igual forma, los equipos que utiliza AVP cuando hay que reponer inodoros, lavamanos, duchas, entre otros, en las unidades de vivienda pública, cumplen con los requerimientos del Departamento de Vivienda Federal (HUD), los cuales requieren un consumo eficiente del agua.

Así pues, desde un punto de vista presupuestario, es importante señalar que estimar una cuantía específica del impacto que la medida tendría, resulta impracticable porque no contamos con un inventario de los equipos y accesorios disponibles en el mercado para dar cumplimiento a lo propuesto. Por ejemplo, sabemos que entre este equipo se consideran inodoros, duchas, rociadores de mangueras, reguladores de presión, sistemas de irrigación, equipos para lavado de ropa y platos, sistemas de tratamientos de aguas residuales, sistemas de climatización, por mencionar aquellos fácilmente identificables. Los costos de estos equipos podrían resultar mayores que los regulares.

Por lo que, requerir que en siete (7) años se reemplacen todos los equipos de plomería en las dependencias públicas sin duda implicaría un alto costo a corto plazo. Más aun, debe considerarse que la vida útil de muchos de estos equipos excede dicho periodo, por lo que para cumplir con la medida tendría que disponerse de equipo aun en condiciones de uso, a pesar de que las entidades gubernamentales podrían tener otras necesidades apremiantes de equipo necesario para su funcionamiento.

En cuanto a ello, debemos llamar la atención a que los retos fiscales que afrontamos actualmente imponen una responsabilidad mayor, de cautela y austeridad para con los gastos públicos. Como parte del plan para la estabilización de las finanzas del Gobierno y como paso firme hacia la recuperación financiera del País, es indispensable que todas las medidas que se aprueben sean responsables fiscalmente y estén basadas en un análisis sobre costo/beneficio. A esos efectos, sugerimos que se haga un análisis cuidadoso que logre un balance para lograr el objetivo loable de la medida mientras se maximizan los limitados recursos del Estado.

A la luz de lo anterior, recomendamos que, previo a establecer una obligación de las instrumentalidades públicas de efectuar la considerable inversión que representa la medida, se considere la viabilidad de establecer un plan piloto con una entidad gubernamental que permita medir la efectividad de la sustitución de equipos propuesta. A tales fines, el plan piloto debería efectuarse en una instrumentalidad donde: i) sea posible medir la efectividad (por ejemplo, que se trate de una entidad cuyo consumo de agua es continuo y estable); y ii) cuyo tamaño no requiera una inversión considerable y que sea razonable.



Por otro lado, recomendamos que la medida sea extensiva a nuevas construcciones o renovaciones cuando ello sea costo-eficiente y económicamente viable. Por su parte, el reemplazo de equipo ya existente debe estar sujeto a los resultados del plan piloto, a la disponibilidad de fondos y a que no se afecte la atención de otras necesidades apremiantes de equipo. Ciertamente, ello conlleva re-evaluar la razonabilidad del término de siete (7) años propuesto.

Finalmente, teniendo en consideración lo antes expuesto, sugerimos que se consulte con las distintas entidades a las cuales la medida le impone responsabilidades; entiéndase, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Vivienda, la Administración de Vivienda Pública y el Departamento de Educación, sobre los costos y viabilidad de la medida.

Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad a esta Honorable Comisión durante el proceso legislativo **Proyecto de la Cámara Núm. 2204**, texto aprobado por la Asamblea Legislativa.

Cordialmente,

Luis F. Cruz Batista